Sistemas políticos y quiebre del bipartidismo. Análisis histórico comparado entre Uruguay y Venezuela.

Rafael Miranda*

Uruguay y Venezuela fueron consideradas como democracias ejemplares en América Latina y su bipartidismos como los más consolidados del mundo. Sin embargo, en la contemporaneidad hubo un agotamiento del bipartidismo en ambos países y derivaron en sistemas políticos muy diferentes entre sí. Por ello, el objetivo de esta investigación es comparar la evolución histórica de los sistemas políticos de Uruguay y Venezuela, con especial énfasis en sus bipartidismos y emergencias de terceros actores. En el artículo se afirma que una alta estabilidad en el sistema de partidos políticos no he garantía para una alta calidad democrática y que la resiliencia del sistema de partidos políticos en las coyunturas criticas es fundamental para la calidad de la democracia.

Palabras claves: Uruguay; Venezuela; Sistemas políticos; Bipartidismo; Análisis histórico comparado (AHC).

Political systems and bipartidism broken. Compared historical analysis between Uruguay and Venezuela.

Abstract

Uruguay and Venezuela were considered exemplary democracies in Latin America and their bipartisanship as the most consolidated in the world. However, in the contemporaneity there was a bipartidism broken in both countries and they led to very different political systems. For this reason, the aim of this research is to compare the historical evolution of the political systems of Uruguay and Venezuela, with special emphasis on their bipartisanship and emergencies of third parties. The article states that high stability in the political party system does not guarantee a high democratic quality and that the resilience of the political party system at critical junctures is fundamental to the quality of democracy.

Key words: Uruguay; Venezuela; Political systems; Bipartisanship; Comparative historical analysis (CHA).

^{*} Director cofundador del Grupo de Investigaciones Sobre Estudios del Desarrollo y Democracia (GISEDD). Postdoctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales Universidad Ricardo Palma de Perú, Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Humana de la Universidad de los Andes Venezuela, Economista de la Universidad de los Andes Venezuela. Coordinador de la Sección de Estudios de Posgrado del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES). Profesor de pre – grado del área de Política Económica Aplicada y de post – grado en el Doctorado en Estudios Políticos, Doctorado en Ciencias Humanas y la Maestría en Economía, Maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes Venezuela. Correo electrónico: rafaelgustavomd@hotmail.com

Introducción

Desde hace ya más de una década se ha hablado del giro a la izquierda de los sistemas políticos de América Latina para dar cuenta de la llegada a la presidencia de fuerzas políticas que se declaran progresistas. Dentro de esta rúbrica de izquierda podemos encontrar un vario pinto de gobiernos bastante distantes entre sí como el de una izquierda moderada socialdemócrata en Uruguay hasta uno populista y de autoritarismo plebiscitario como el de Venezuela.

En este contexto encontramos los casos de Uruguay y Venezuela que fueron consideradas como democracias ejemplares en América Latina y su bipartidismos como los más consolidados del mundo. Sin embargo, en la contemporaneidad, hubo un agotamiento del bipartidismo en ambos países y llegaron a la presidencias terceros actores con una agenda programática muy distinta entre sí, que derivaron en sistemas políticos muy diferentes. Así pues, surge la interrogante ¿Por qué Uruguay y Venezuela luego de compartir niveles altos de calidad de la democracia para estándares regionales y un bipartidismo institucionalizado, derivaron en regímenes tan diferentes entre sí?

Por ello nos planteamos como objetivo de investigación comparar la evolución histórica de los sistemas políticos de Uruguay y Venezuela, con especial énfasis en sus bipartidismos y emergencias de terceros actores.

La metodología utilizada es el Análisis Histórico Comparado (AHC) ya que el rastreo inductivo de contextos amplios y la descomposición secuencial de la narrativa histórica densa, nos permite inferir los eventos claves y sus configuraciones causales con un peso explicativo mayor. La yuxtaposición de los contextos con largos horizontes temporales nos permite analizar sistemáticamente los orígenes, impacto y estabilidad (o inestabilidad) de las configuraciones subyacentes de las principales instituciones y sus interrelaciones que han dado forma a los procesos políticos contemporáneos.

El artículo se presenta en tres secciones, auge y declive de los bipartidismos donde se caracteriza la influencia de los sistemas de partidos en los sistemas políticos y en la dimensión socioeconómica, en emergencia de los nuevos actores se explica el agotamiento del bipartidismo y el papel de los nuevos autores en sus sistemas políticos, y en gobierno de los nuevos actores se contrastan los gobiernos contemporáneos del Frente Amplio y del *chavismo*.

Auge y declive de los bipartidismos

Sartori (2003) nos recuerda que los partidos políticos y sus sistemas son los principales generadores de pluralismo político, articulan y expresan las demandas sociales y tienen una capacidad privilegiada para que los gobernantes respondan ante estas demandas. Los sistemas de partidos políticos también canalizan el informe razonamiento público, con su función de agregación, selección y configuración, traducen el razonamiento público a exigencias concretas.

En Uruguay y Venezuela los partidos políticos fueron los principales actores de la vida política y social de sus países, del nacimiento y democratización de sus sociedades, como de su modernización socioeconómica.

Uruguay tuvo una temprana experiencia democrática al ser parte de la denominada primera ola de democratización y su bipartidismo, junto con el estadounidense, es uno de los más antiguos del mundo. El Partido Colorado y el Partido Nacional (mayormente conocido como Partido Blanco) surgieron en la década de 1830 y fueron por mucho tiempo los principales protagonistas de la vida política uruguaya.

La tradición pluralista y competitiva del Uruguay es de larga data, a pesar de los dos periodos autoritarios, gran parte de su historia republicana ha sido democrática, y sus instituciones, la participación en el poder público, los modos de gobierno, el ejercicio de la autoridad pública y la cultura política son de las más democrática y arraigadas en la región. Estas cualidades se deben especialmente a la competencia partidaria que consiguió un sistema de partidos políticos competitivo y plural. A mediados del siglo XIX luego de la llamada Guerra Grande que enfrento a colorados y blancos y dio forma al Estado, estas divisas políticas llegaron a acuerdos para consolidar mecanismos institucionales, códigos de competencia y principios de compartición del poder, que no solo influyeron en el sistema de partidos políticos sino que también en la arquitectura política del Estado y en el carácter de la sociedad civil y sus construcciones identitarias. Los partidos se configuraron como atrapa todo (catch all), de alcance nacional y articulación pluriclasista, con amplio espectro de convocatoria social y un alto grado de integración entre sus miembros, lo que ha generado significativas identidades y subcultura políticas (Lanzaro, 2004; Dutrénit, 1996; Nohlen, 2005; Moreira, 2006).

Por su parte, el bipartidismo venezolano es de más reciente creación pero al igual que el uruguayo, fue fundamental para la construcción de la democracia en el país, siendo considerado en su momento como una de las mejores democracias de la región y junto con Costa Rica y Colombia, las únicas sobrevivientes de la región a la segunda contra ola de la democracia. Venezuela antes de 1958 solo había tenido ocho años de gobiernos civiles y tres de democracia (1945 - 1948) conocidos como el trienio adeco, por lo que el nacimiento de la democracia se confunde prácticamente con el nacimiento del bipartidismo.

El periodo democrático en Venezuela comienza con la ciada de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez que dio paso al denominado Pacto de Punto Fijo, el evento fundacional de la historia política contemporánea de Venezuela. En dicho pacto de 1958 subscrito por los principales partidos que habían logrado el derrocamiento de la dictadura como lo fueron Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD) (el Partido Comunista de Venezuela fue marginado del acuerdo) acordaron una tregua de unidad nacional y defensa de la democracia, que configuró un sistema de partidos políticos con un programa común caracterizado por la moderación de las políticas y una competencia limitada, se institucionalizaron los principios de compartición del poder que incluía gobernar en coalición y la repartición de puestos ministeriales y empleos públicos. Desde 1969 comenzó la alternancia partidista en la presidencia con la victoria del copeyano Rafael Caldera y desde 1973 el sistema político evidencio una importante concentración de votos y poder entre Acción Democrática y COPEI Estos partidos políticos fueron considerados los más fuertes del mundo, estuvieron altamente institucionalizados, nacionalizados, disciplinados y centralizados, mantuvieron fuertes lazos de identidad con la población en general y con los sectores de intereses específicos, especialmente Acción Democrática con los sindicatos, incluso dominándolos en muchos casos. También controlaron el proceso de selección de los candidatos, su desempeño en el gobierno y en la legislatura, mantuvieron extensas organizaciones partidarias en las distintas regiones del país pero concentraron el poder en una pequeña elite (Mainwaring y Scully, 1997; Molina y Thibaut, 2005; Coppedge, 2005; Smith, 2005).

Estos bipartidismos se mantuvieron durante largos periodos no solo por su lógica interna, sino por su función externa primordial de dar respuestas a las demandas de la sociedad civil.

En Uruguay se realizaron importantes avances en materia social, especialmente durante las administraciones del colorado José Batlle y Ordóñez (1903 – 1907 y 1911 – 1915) cuando se promovió la creación de agencias gubernamentales y empresas públicas, y se introdujo una legislación social bastante avanzada para el momento de la región que favoreció especialmente a mujeres, niños y obreros. Así el Estado nace como Estado amplio en servicios públicos, como Estado de bienestar, y se construyó un vínculo solido entre ciudadanía política y ciudadanía social. De hecho, el batllismo consiguió un consenso ideológico que tiene influencia hasta la actualidad y no solo en los colorados. También vale resaltar que desde la década de 1870 la educación es común, laica y gratuita, siendo esta

fundamental para la construcción de la ciudadanía y de la integración social (Lanzaro, 2004; Nohlen, 2005; Dutrénit, 1996).

En Venezuela durante los veinte primeros años se industrializo el país y se dieron importantes mejoras materiales de la población, se implementó la reforma agraria, todos los presidentes alternaron en el poder respetando sus periodos constitucional, se establecieron acuerdos con la guerrilla que había surgido luego de la marginalización del Partido Comunista del Pacto de Punto Fijo y se incorporó a la política legal, los militares recibieron mejoras materiales y amnistías y en contrapartida abandonaron la arena política, el apoyo popular fue masivo y la participación electoral se mantuvo alrededor del 90% de los votantes. Los niveles de sanidad y escolarización alcanzaron los niveles más altos de la región y se emulo el modelo japonés de becar a los ciudadanos para cursar estudios en las más reputadas universidades internacionales, todo esto financiado con la renta petrolera (Caballero, 2000; Kornblith, 1994; Coppedge, 1994; Molina y Thibaut, 2005; Miranda, 2017).

La moderación de la política y la oposición leal fueron fundamentales para la continuidad de los bipartidismos. Sin embargo, en la década de 1960 en Uruguay y en la década de 1970 en Venezuela iban a quebrase estos fundamentos, así se debilitaron los bipartidismos transformando no solo a los sistemas de partidos políticos sino al sistema político en su totalidad.

En la década de 1960 en Uruguay se conjugaron una crisis económica con una mayor virulencia y lógica centrípeta del bipartidismo, la politización de las fuerzas armadas y la emergencia de la guerrilla urbana *Tupamaru*.

Durante la década de los sesenta comenzó la segunda contra ola de la democracia donde numerosos regímenes democráticos, incluyendo los del Cono Sur, transitaron hacia el autoritarismo derivados de los golpes de Estado, como el de Uruguay en 1973. Luego del periodo militar el sistema de partidos políticos continúo con su lógica moderada y centrípeta y con la alternancia presidencial entre colorados y blancos, alcanzaron la presidencia: el colorado Julio María Sanguinetti (1985 – 1990), el blanco Luis Alberto Lacalle (1990 – 1995) y de nuevo Julio María Sanguinetti (1995 – 2000) y otro colorado Jorge Batlle (2000 – 2005). Así hasta la llegada a la presidencia una tercera fuerza, el Frente Amplio.

En Venezuela desde 1978 hasta 1998 se evidenció la incapacidad de los partidos políticos para renovar sus cuadros, aumentó de la abstención y de la volatilidad electoral, una burocracia extremadamente ineficiente, corrupción, y la coaptación partidaria de la sociedad civil. En lo económico, a finales de la década de 1970 el auge derivado de la industrialización y de la renta petrolera se fue agotando y con ella la capacidad clientelar y de garantía de servicios públicos por parte del Estado, la pobreza y el desempleo aumentaron significativamente. En 1983 se devaluó el bolívar como consecuencia del aumento de la deuda pública, la inflación y la baja de los precios del petróleo, reduciendo el gasto social que había sido fundamental para silenciar los conflictos sociales, generándose una crisis de legitimidad y malestar social, aumentó la malnutrición y las enfermedades antes erradicadas, y en la década de 1990 en un contexto de escándalos de corrupción se aplicaron políticas de corte neoliberal generando la explosión social de mayor envergadura en la región en contra de estas medidas (Caballero, 2000; López, 1994; Mainwaring y Pérez-Liñán, 2005; Coppedge, 2005; Coppedge, 1994; Levine y Crisp, 1999; Kornblith, 1994; Karl, 1988; Molina y Thibaut, 2005; Smith, 2005; Valenzuela, 2004; Schamis, 2006).

Todo lo anterior derivo en los dos golpes de Estado fallidos en 1992 y manifestaciones populares que se resolvieron con fuertes represiones, y por primera vez en la historia democrática del país un presidente no terminó su periodo constitucional debido a un impeachment por actos de apropiación indebida de fondos públicos, Carlos Andrés Pérez.

Un rasgo característico de los bipartidismos de larga data es la tendencia hacia la convergencia del sistema de partidos. En los casos de Uruguay y Venezuela se dio esta convergencia hacia la centra derecha con el desplazamiento del Partido Colorado y de Acción Democrática, generando una desalineación partidista dejando todo el espectro político de la izquierda libre para ser cubierto por fuerza emergentes fuera del bipartidismo.

Emergencia de los nuevos actores

En Uruguay antes de la dictadura militar a comienzos de la década de 1970 emergió por la centro izquierda el Frente Amplio y en Venezuela también en la década de 1970 luego de la escisiones del Partido Comunista de Venezuela (PCV) se formaron varios partidos de izquierda, teniendo especial relevancia electoral el Movimiento al Socialismo (MAS) y la Causa Radical.

El Frente Amplio nació en 1971 como una coalición de partidos que se fue transformando en un partido de coaliciones. Su contexto de emergencia puede remontarse hasta 1958 cuando la ruptura de la coalición batllista demandó el establecimiento de un modelo de Estado y de gobierno alternativo, desembocando en la Reforma Constitucional de 1966 que modificó algunas de las bases originarias del sistema político como el régimen electoral y sirvió de preludio para el gobierno con rasgos autoritarios de Jorge

Pacheco y la dictadura. Así pues, el Frente Amplio nació como un partido de ideas que cubre un amplio espectro de la izquierda plural, con altos niveles de fraccionalismos y una democracia interna considerable. El periodo de la dictadura relegó a los partidos de la vida política pero con la reinstauración de la democracia el Frente Amplio confirmó su presencia como un actor de relevancia en el sistema de partidos, y gracias a su papel en la recuperación de la democracia redimensiono su propuesta y se incorporó como igual en la narrativa nacional que ya no fue más monopolio de colorados y blancos. Durante sus primeros veinte años de existencia el Frente Amplio se mantuvo alrededor del 20% de votación para presidente pero luego de la crisis financiera del 2002 y de moderar sus propuestas de políticas tuvo un mayor empuje electoral que los llevo a ganar su primera presidencia siendo electo Tabaré Vázquez con el 51.7% de los votos válidos (Lanzaro, 2010; Lanzaro, 1998; Moreira, 2006; Dutrénit, 1996; Nohlen, 2005)

En Venezuela en un contexto de malestar social y profunda deslegitimidad del sistema de partidos políticos durante la década de 1980, la abstención electoral se posiciono alrededor del 40 por ciento y otros partidos fuera del bipartidismo tradicional venezolano tomaron mayor relevancia. En la década de 1970 el Partido Comunista de Venezuela sufre varias escisiones por la incompatibilidad de posiciones en torno a temas como la derrota de la lucha armada venezolana y las políticas del comunismo ortodoxo, lo que dio paso a la emergencia de otros partidos de izquierda como el Movimiento al Socialismo (MAS) y la Causa Radical (Causa R), estos partidos encontraron apoyo en intelectuales de izquierda como Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez (ambos cofundadores del MAS) y otros agrupados en la organización La Casa del Agua Mansa, estudiantes universitarios, en los sectores populares urbanos y en algunos sindicatos de la región de Guayana. Aunque en los primeros años estos partidos no lograron consolidar su posición en el sistema de partidos evidenciado esto por la alta volatilidad electoral que mostraron, el proceso de emergencia de los nuevos actores se corono con la victoria de las elecciones presidenciales de Rafael Caldera en 1993, quien si bien fue fundador de COPEI, en esa ocasión participo como independiente del bipartidismo tradicional y con el apoyo de la coalición conocida como el chiripero donde desataba el apoyo del MAS, Unión Republicana Democrática, Partido Comunista Venezolano, unos pequeños partidos de izquierda y de Convergencia, este último plataforma electoral conformada con la escisión de una facción de COPEI. Esta salida de Caldera fue el corolario del fin de establishment del bipartidismo venezolano, quien anteriormente había tendió otros gestos en esa dirección como su intervención en el Senado donde atribuyo la causa la subversión militar a los graves desatinos del gobierno y a la corrupción, y se rehusó a participar en un gabinete de unidad y salvación nacional. También vale destacar de estas elecciones el desempeño de la Causa Radical quien con su candidato Andrés Velásquez obtuvo más del 20% de los votos para la presidencia (López, 1998; Petkoff, 1989; Palacios, 2000; Mainwaring y Pérez-Liñán, 2016; Smith, 2005; Coppedge, 1994).

Los Partidos históricos de centro izquierda, el Partido Colorado uruguayo y Acción Democrática de Venezuela, perdieron sus agendas programáticas tradicionales dejando el espectro de la izquierda sin oferta partidista permitiendo así las emergencias de nuevas fuerzas de izquierda. Pero en Uruguay los partidos Colorado y Blanco si bien perdieron caudal electoral continuaron en competencia ampliando la oferta partidaria institucional en el espectro político, a diferencia de Venezuela donde la emergencia de nuevos actores vino con el declive de la efectividad electoral de los partidos tradicionales.

Las diferencias en el desempeño de estos nuevos actores en Uruguay y Venezuela tuvieron efectos decisivos no solo para el sistema de partidos políticos sino para la totalidad del sistema político.

La llegada del Frente Amplio en Uruguay significo la posibilidad de una alternancia ideológica y programática efectiva, representada en una izquierda democrática. A diferencia del caso de Uruguay, en Venezuela el cambio fue más de siglas que de forma de hacer política o de agenda programática, Rafael Caldera no avanzo en ninguna de sus promesas electorales, incluyendo la reforma constitucional, y continuo dentro del mismo signo en la agenda de políticas públicas enmarcadas en los planes de ajustes estructurales. Esto hizo que rápidamente la sociedad civil venezolana se decepcionaran y se expresara mediante masivas manifestaciones callejeras y con el retiro de gran parte de su apoyo electoral a los partidos y a los liderazgos que habían alcanzado recientemente el gobierno. El Movimiento al Socialismo y especialmente la Causa Radical también sufrieron un conjunto de limitaciones internas derivado de su estructura partidista de toma de decisiones, intereses irreconciliables e incapacidad para construir cadenas de equivalencias entro los heterogenias grupos que aglutinaron y que no compartían mucho más que el malestar respecto al sistema político.

La dimensión económica también tuvo un papel considerable en el contraste. Si bien Uruguay sufrió a comienzo de la década del 2000 la crisis financiera más grave de su historia, en Venezuela la crisis económica tomo otras dimensiones ya que fue económicamente más profunda, y tuvo un impacto más inmediato en la legitimidad del sistema político debido a que la crisis económica tuvo como uno de los elementos principales la caída de los precios inter-

nacionales del petróleo, y con ellos, la caída de la capacidad del Estado para ofrecer los servicios básicos, mantener la redistribución de recursos y las políticas clientelares que eran en los últimos años la base de apoyo popular a los partidos políticos y al sistema en general. La democracia equivalía a partidocracia, analítica y teóricamente son separables, pero en la empírea venezolana ambas nacieron y declinaron juntas. Y todo ello en un contexto de corrupción endémica en todos los niveles de gobierno, pública y notoria.

En Uruguay hubo un realineamiento del sistema político con la institucionalización de un nuevo sistema de partidos políticos y en Venezuela hubo propiamente un desalineamiento, ya que los ciudadanos perdieron confianza en los partidos políticos en general y su sistema se desinstitucionalizó, para que finalmente la sociedad civil votara por actores antisistema.

Así pues, mientras que en Uruguay se conformó un sistema de partidos políticos moderado con una competencia centrípeta, en Venezuela se abrió el espacio para otra tercera fuerza, pero esta yo no vino de una oposición leal, sino de una oposición antisistema que planteo lo político en una lógica de amigo – enemigo, Hugo Chávez y su Movimiento Quinta República (MVR).

El Teniente Coronel Hugo Chávez se dio a conocer en el país cuando lidero un fallido golpe de Estado el 4 de febrero de 1992 que conto con popularidad en amplios sectores del país. Seis años después se presentó en las elecciones presidenciales y obtuvo la victoria. Chávez obtuvo la victoria con el apoyo de la coalición llamada Polo Patriótico conformada por la plataforma electoral chavista Movimiento Quinta República (MVR), y con las principales fuerzas del antiguo chiripero como el MAS y el Partido Patria Para Todos (PPT) que nació de una escisión de la Causa Radical. El Teniente Coronel Chávez logro aglutinar con su discurso antisistema al gran número de venezolanos decepcionados de lo político institucional. Con la candidatura de Chávez se rompieron dos elementos fundamentales de la democracia venezolana, su carácter civilista e institucionalista.

Los partidos Acción Democrática y COPEI decidieron a pocos días de las lecciones unir fuerzas y dar su apoyo al poco carismático Henrique Salas Römer, pero no lograron mayor apoyo.

Así comenzó una nueva bipolaridad en Uruguay y en Venezuela, en el primero el Frente Amplio se posiciono como un partido catch all en la centro izquierda, y Colorados y Blancos en la centro derecha, y en el segundo caso el chavismo se ha posicionado en un espacio autoritario y en el otro polo se posiciona el anti chavismo, un conjunto heterogéneo de actores que incluye desde una oposición mode-

rada hasta una desleal, que no comparten mucho más que el rechazo por el chavismo.

Gobierno de los nuevos actores

El Frente Amplio y las fuerzas del chavismo aglutinadas en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han gobernado con mayoría y sin necesidad de formar coaliciones, y al ser fuerzas bastante disciplinadas, sus agendas de políticas gubernamentales han sido extensamente aplicadas afectando efectivamente sus respectivos regímenes.

La emergencia del Frente Amplio ha movido hacia la izquierda el espectro político uruguayo, y sus tres gobiernos consecutivos con Tabaré Vázquez (2005 - 2010), José Mujica (2010 - 2015) y lo que va de gobierno de Tabaré Vázquez electo de nuevo en el 2015, son considerados como los más social democrático de la historia de América Latina y han logrado combinar la economía de mercado con el Estado de bienestar más desarrollado de América Latina. Si bien la economía no ha logrado mayor crecimiento económico, el desempleo se mantiene estable y el salario real ha crecido gracias al reforzamiento de la negociación colectiva. Se han ampliado las políticas a favor de las personas en estado de pobreza y de extensión de la ciudadanía social en general con un enfoque de derechos, por canales de tipo burocrático y mediante arreglos institucionales específicos como el Ministerio de Desarrollo Social y el Banco de Previsión Social, y en un contexto de balance de poderes, negociación y compromisos, lo que permite la veeduría político administrativa y el gradualismo (Lanzaro, 2010; Moreira, 2006; Pérez y Piñeiro, 2016; López y Moraes, 2014).

También se debe señalar que para la conformación de este gobierno socialdemócrata contribuyó que las reformas de modernización económica y del Estado llevadas a cabo en América Latina durante la década de 1990, fue particular en Uruguay ya que mantuvo en manos del Estado a las empresas y servicios públicos estratégicos como la educación y la seguridad social

El Frente Amplio ha repolitizado la agenda programática de las políticas públicas y ha fortalecido a la sociedad civil. Por ejemplo, el PIT-CNT que desde la década de 1960 se ha conformado como la única central sindical del país y ha tenido importantes vínculos históricos con el Frente Amplio, donde la mayoría de los dirigentes sindicales son también miembros del partido, ha mantenido su autonomía incorporando reivindicaciones sindicales en la agenda programática del partido y en las políticas públicas del gobierno. Por el contrario, el chavismo no reconoció la derrota de su candidato en las elecciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en el 2001 y ha conformado un conjunto de organizaciones sindicales

paralelas afines a los intereses del gobierno. En Venezuela se ha repolitizado a la sociedad civil pero de una forma no democrática y de subordinación, la legitimidad pasa por una concepción no liberal y deformada de la democracia, donde los acuerdos y el dialogo no son los rasgos distintivos sino las movilizaciones y los plebiscitos, la política no se ve más como la construcción del bien público sino como la lucha entre amigo – enemigo, y al no haber una mediación entre el líder y la sociedad civil, como si se da en Uruguay con el Frente Amplio, la sociedad civil pierde su autonomía por el desbalance de poder, las relaciones se construyen de forma clientelar y no con un enfoque de derecho, la pluralidad social y de demandas queda reducida a un discurso homogeneizador.

Así pues, se puede señalar que el gobierno chavista se puede definir en un primer momento como populista, entendiendo como populismo la estrategia política que se distingue por dos elementos, el primero es la relación directa entre el líder y la sociedad, es decir, es anti institucional, y segundo, es cortoplacista, ya sean sus ofertas electorales o sus políticas, el horizonte de acción es el corto plazo (Weyland, 2001).

Pero al perder su capacidad de ganar elecciones y de mantener sus políticas clientelares, en un contexto de debilidad de las instituciones liberales, el gobierno ha tomado unas cualidades que lo puede definir como autoritarismo plebiscitario.

Levitsky y Way (2005: 5) han desarrollado el concepto de autoritarismo competitivo, para distinguir a un tipo de régimen hibrido, no democrático, que se distingue por ser un régimen civil donde las instituciones democráticas formales son los mecanismos para alcanzar el poder pero los titulares del poder del Estado abusan de su posición para tener ventajas significativas en la competencia por el poder. Los autores afirman que el autoritarismo competitivo se diferencia del autoritarismo porque en este último no existen canales institucionales para que la oposición pueda llegar al poder, pero si bien en el autoritarismo competitivo si existen estos canales, al menos uno de los siguientes elementos es lesionado: las elecciones libres, las libertades civiles o la igualdad de condiciones. Si bien en estos regímenes las elecciones no presentan fraudes masivos tampoco son del todo libres ni justas, técnicamente no hay fraudes pero el desequilibrio en el acceso a los recursos y a los medios de comunicación hace injustas las elecciones. Los autores definen como línea de demarcación entre un régimen autoritario y un autoritarismo competitivo, cuando los partidos de oposición pueden usar las instituciones democráticas para competir seriamente por el poder, y señalan que un régimen no es competitivo cuando los candidatos principales son formalmente prohibidos o efectivamente excluidos de manera regular, cuando la represión o los controles legales impiden efectivamente a los partidos de la oposición realizar campañas públicas, o cuando el fraude es tan masivo que prácticamente no hay correspondencia entre las preferencias de los votantes y los resultados electorales oficiales, también advierten que las instituciones informales son las más significativas en estos regímenes ya que son las que verdaderamente dictan la dinámica política en estos casos (Levitsky y Way, 2005 y 2010).

Si bien Levitsky y Way (2005 y 2010) advierten en su caracterización que los regímenes que describen no son realmente competitivos, mantienen el adjetivo. Nosotros consideramos que ir a elecciones constantemente no hace a un régimen competitivo, ni que un régimen autoritario, como en el caso de Venezuela, puede ser realmente competitivo.

El gobierno de Chávez inmediatamente después de ser elegido convocó una Asamblea Constituyente que le permitió alargar el periodo presidencial a seis años y la posibilidad de una reelección inmediata, luego declaró en crisis al poder judicial y destituyó a más de cien jueces, esta nueva constitución disolvió la Corte Suprema y la reemplazó por un nuevo órgano. En el 2007 el gobierno perdió el referéndum consultivo que incluía la reelección presidencial indefinida pero insistió en el 2008 y logro ganar, legalizando la reelección indefinida, disminuyo los poderes de la Asamblea Nacional y dejo la administración de las Fuerzas Armadas y sus asensos dependiendo de la presidencia. Adicionalmente, el Tribunal Supremo de Justicia ha funcionado como un actor de veto aliado al chavismo perdiendo la legitimidad como árbitro imparcial, y las iniciativas legislativas y judiciales han partido casi exclusivamente de la presidencia. La Contraloría también perdió su autonomía, por ejemplo, este órgano del Poder Ciudadano ha favorecido al chavismo con la figura de inhabilitaciones administrativas que ha excluido de las elecciones a candidatos de la oposición con altas preferencias sin que mediara condena firme de un tribunal como lo exige la Constitución (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2016; Penfold, Corrales y Hernández, 2014; Penfold, 2010; Morlino, 2014; Ramos, 2011; Maingon y Welsch, 2009; Álvarez, 2008; Sánchez, 2016).

En Venezuela, el régimen ha tomado un carácter plebiscitario, donde la democracia está cada vez más restringida al ámbito electoral. Se han realizado numerosas elecciones y referéndums, todas planteadas como un plebiscito a la figura de Chávez y apelando a su carisma, incluso en las elecciones presidenciales del 2013 luego de su fallecimiento cuando fue electo Nicolás Maduro.

En las elecciones presidenciales, referéndums constituyentes, revocatorios, elecciones regionales y locales el chavismo siempre obtuvo más del 50 por ciento, pero en todas las elecciones la iniciativa no surgió desde la ciudadanía sino desde la presidencia. Estas elecciones han sido no competitivas ya que si bien los mecanismos básicos y las regularidades técnicas se han cumplido, su ente garante, el Consejo Nacional de Elecciones (CNE) ha permitido una marcada asimetría de financiamiento y acceso a los medios de comunicación a favor del chavismo, haciendo la competencia por el voto popular muy desequilibrada, violando la constitución que prohíbe el financiamiento público en las campañas electorales del gobierno y sancionando rápidamente cualquier falta de la oposición (Ramos, 2006; Penfold, Corrales y Hernández, 2014; Penfold, 2010; Sagarzazu, 2013; Cyr, 2013; Maingon y Welsch, 2009).

Adicional a estas desventajas, cuando la oposición ha ganado elecciones de gobernaciones y alcaldías se han superpuesto y desplazado sus competencias con los Consejos Comunales, órganos del Poder Popular constituidos y no electos, creados para competir con las autoridades electas y no para complementarlas, y que no son expresión propia de la sociedad civil autónoma, sino que fueron creadas y financiadas por la presidencia. Aunado al débil federalismo del Estado, la presidencia ha asumido mayores responsabilidades administrativas en espacios locales donde el chavismo ha perdido elecciones. Y en el 2015 cuando la oposición gano la mayoría en el Poder Legislativo, el gobierno desconoció sus competencias (Peña, 2017; Brewer, 2011; Álvarez, 2008).

Estos rasgos autoritarios se han acentuados con la presidencia de Maduro, acentuado también la inestabilidad y la polarización política y social. Se ha realizado desde el gobierno una diferenciación política de los ciudadanos que se traduce en diferencia de derechos civiles y sociales. La polarización también se ha expresado en la oposición, en partidos como Vente Venezuela y Voluntad Popular que han utilizado métodos no democráticos para la competencia política, como el fallido golpe de Estado del 2002. Dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición de partidos de oposición fundada en 2008, hay tensiones públicas y notorias

Finalmente, en lo que va del 2018 se han denunciado numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos policiales y de la guardia nacional, que ha llevado a la Fiscal General y a la Asamblea Nacional a catalogar dichas acciones como terrorismo de Estado. También se presenta lo que denominamos régimen fallido, ya que si bien el Estado mantiene un monopolio de la violencia este no es legítimo y los poderes del Estado se desconocen mutuamente.

Conclusiones

El análisis comparado entre los sistemas políticos de Uruguay y Venezuela advierten que una alta estabilidad en el sistema de partidos políticos no he garantía para una alta calidad democrática, y que la resiliencia del sistema de partidos políticos en las coyunturas criticas es fundamental para la calidad de la democracia.

En Uruguay y Venezuela se pueden observar la tendencia general de los bipartidismos estables a converger hacia el centro del espectro político lo que permite la emergencia de nuevos actores. Pero las cualidades de esos actores van a depender del momento económico y social de la coyuntura, y su posible gobierno de las instituciones en las cuales se va a desenvolver.

En el caso de Uruguay el nuevo actor llego al gobierno en un contexto de pérdida de apoyo al bipartidismo tradicional mientras que en Venezuela el nuevo actor llego al gobierno en un contexto de rechazo al sistema político en general.

En el caso uruguayo los retos del sistema político y partido de gobierno se dan dentro del marco democrático, la baja popularidad de los resultados de algunas política pública, o el aumento de la distancia ideológica dentro del Frente Amplio y sus escisiones como el Partido Independiente (PI). Mientras que en Venezuela el reto es la recuperación de la democracia.

Bibliografía

Álvarez, Ángel, Venezuela (2008). ¿la revolución pierde su encanto? *Revista de ciencia política*, 28, 1, 2008, 405-432.

Brewer, Allan (2011). Leyes Orgánicas sobre el poder Popular y el Estado Comunal. Caracas, Venezuela, Editorial Jurídica Venezolana.

Caballero, Manuel (2000). La gestación de Hugo Chávez. 40 años de luces y sombras en la democracia venezolana, Madrid, España, La catarata.

Coppedge, Michael, Explaining Democratic Deterioration in Venezuela through Nested Inference (2005). En Frances Hagopian y Scott Mainwaring (Eds.) *The Third Wave of Democratization in Latin America*. Cambridge University Press. Cambridge, Inglaterra.

Coppedge, Michael (1994). Perspectivas de la gobernabilidad democrática en Venezuela, *América Latina hoy*, 8, junio 1994, 63-72.

Dutrénit, Silvia (1996). El Frente Amplio y la reproducción de la identidad política, *Nueva sociedad*, 144, julio-agosto, 1996, 126-137.

Karl, Terry (1988). El petróleo y los pactos políticos: la transición a la democracia en Venezuela. En: Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead

(comps.) *Transiciones desde un gobierno autoritario. América Latina*. Paidos ediciones. Buenos Aires, Argentina.

Kornblith, Miriam (1994). La crisis del sistema político venezolano, *Nueva sociedad*, 134, noviembre-diciembre 1994, 42-57.

Lanzaro, Jorge (2010). Uruguay: un gobierno social democrático en América Latina, *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 19, 1, 2010, 45-68.

Lanzaro, Jorge (2004). Fundamentos de la democracia pluralista y estructura política del Estado en el Uruguay, *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 14, 1, 2004, 103-135.

Lanzaro, Jorge (1998). La izquierda uruguaya. Entre la oposición y el gobierno, *Nueva sociedad*, 157, septiembre-octubre 1998, 154-165.

Levine, Daniel y Crisp, Brian (1999). Perspectivas de la gobernabilidad democrática en Venezuela, *América Latina hoy*, 21, abril 1999, 5-24.

Levitsky, Steven y Way, Lucan (2010). The rise of competitive authoritarianism, *Journal of Democracy*, 13, 2, 2010, 51-65.

Levitsky, Steven y Way, Lucan (2005). Competitive Authoritarianism. Hybrid regimes after the cold war, Cambridge, Inglaterra, Cambridge University Press.

López, Margarita (1998). New avenues for popular representation in Venezuela: La Causa-R and the Movimiento Bolivariano 2000. En: Damarys Canache y Michael Kulisheck (Eds.) *Reinventing Legitimacy*. California, Estados Unidos. Westport: Greenwood Publishing Group.

López, Margarita (1994). Nuevas representaciones populares en Venezuela, *Nueva sociedad*, 144, julio-agosto 1994, 138-151.

López, Santiago y Moraes, Juan (2014). Uruguay 2013: Un balance preelectoral, *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 34, 1, 2014, 293-313.

Maingon, Thais y Welsch, Friedrich (200). Venezuela 2008: ¿hoja de ruta hacia el socialismo autoritario?, *Revista de ciencia política*, 29, 2, 2009, 633-656

Mainwaring, Scott y Pérez-Liñán, Aníbal (2016). La democracia a la deriva en América Latina, POSTData, 20, 2, Octubre/2015-Marzo/2016, 267-294.

Mainwaring, Scott y Scully, Timothy (1997). La institucionalización de los sistemas de partido en la *América Latina*, América Latina hoy, 16, agosto 1997, 91-108.

Miranda, Rafael (2017). Industrialización y desindustrialización en Venezuela. Un análisis histórico. *Ensayos de economí*a, 50, enero-junio 2017, 87-102.

Molina, José y Thibaut, Bernhard (2005). Venezuela, En: Dieter Nohlen (Ed.) *Elections in the Americas a Data Handbook. Volume II: South America*. Oxford University Press. Oxford, Inglaterra.

Moreira, Constanza (2006). Sistemas de partidos, alternancia política e ideología en el Cono Sur, En: *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 15, 2006, 31-56.

Morlino, Leonardo (2014). La calidad de las democracias en América Latina. Informe para IDEA Internacional, San José, Costa Rica, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

Nohlen, Dieter (2005). Uruguay, En: Dieter Nohlen (Ed.) *Elections in the Americas a Data Handbook. Volume II: South America*. Oxford University Press. Oxford, Inglaterra.

Palacios, Marco (2000). Presencia y ausencia de populismo: un contrapunto colombovenezolano, *Análisis político*, 39, enero-abril 2000, 33-56.

Penfold, Michael; Corrales, Javier y Hernández, Gonzalo (2014). Los Invencibles: La reelección presidencial y los cambios constitucionales en América Latina, *Revista de ciencia política*, 34, 3, 2014, 537-559.

Penfold, Michael (2010). La democracia subyugada: El hiperpresidencialismo venezolano, *Revista de ciencia política*, 30, 1, 2010, 21-40.

Peña, Marysergia (2017). Democracia representativa y participación ciudadana en Venezuela (1958-2015), *Revista Telos*, 19, 1, 2017, 3-26.

Pérez. Verónica y Piñeiro, Rafael (2016). Uruguay 2015: Los desafíos de gobernar por izquierda cuando la economía se contrae, *Revista de ciencia política*, 36, 1, 2016, 339-363.

Petkoff, Teodoro (1989). El MAS y la búsqueda de un perfil distintivo, *Nueva sociedad*, 101, mayo-junio 1989, 104-113.

Ramos, Alfredo (2011). La «revolución» que no fue. Desgobierno y autoritarismo en la Venezuela de Chávez, *Estudios Políticos*, 38, 2011, 69-91.

Sartori, Giovanni (2003). *Partidos y sistemas de partidos*. Alianza Editorial. Madrid, España.

Sánchez, Raúl (2016). Venezuela (2015): *Un régimen híbrido en crisis*, Revista de ciencia política, 36, 1, 2016, 365-381.

Schamis, Héctor (2006). Populism, socialism, and democratic institutions, *Journal of Democracy*, 17, 4, 2006, 20-34.

Smith, Peter (2005). Democracy in Latinamerica political change in comparative perspective. Oxford University Press. Oxford, Inglaterra.

Valenzuela, Arturo (2004). Latin American presidencies interrupted, *Journal of Democracy*, 15, 4, 2004, 5-19.

Weyland, Kurt (2001). Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics, *Comparative Politics*, 34, 1, octubre 2001, 1-22.